

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 389

MAGISTRADO PONETE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00565-00
DEMANDANTE:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sociedad que en el presente proceso actúa única y exclusivamente como (Administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA C*C) phinestrosa@alianza.com.co
DEMANDADO:	NACIÓN – MIN DEFENSA – FUERZA AEREA amanda.gomez@fac.mil.co proceso@defensajurídica.gov.co
ASUNTO	NEGAR MANDAMIENTO DE PAGO

I. ASUNTO

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sociedad que en el presente proceso actúa única y exclusivamente como (Administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA C*C) presenta demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEREA para que, se dé el cumplimiento de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con el radicado 2011-00023-00, y el auto interlocutorio No. 198 de fecha 27 de octubre de 2015 (aprobando acuerdo conciliatorio), proferido por la misma corporación.

Procede la Sala a verificar si en el sub examine se cumplen los requisitos para librar mandamiento.

II. ANTECEDENTES

Los señores JOSÉ EDWIN GARCÍA VELASCO, CENEN GARCÍA, FABIOLA VELASCO CHACA. LUIS ELMER GARCÍA VELASCO, CENEN ROLANDO GARCÍA, HUBER EDUARDO VELASCO CHACA Y JENNY PAOLA MEDINA IQUIRA, presentaron demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra de la NACIÓN – MIN DEFENSA – FUERZA AEREA, con el fin de que se declare responsable administrativa y patrimonialmente a las demandadas por los perjuicios morales y materiales sufridos por los actores con ocasión de las lesiones sufridas por José García Velasco cuando prestaba servicio militar obligatorio.

Así pues, mediante sentencia proferida el 29 de octubre de 2014, bajo el radicado 2011-00023-00, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, decidió acceder parcialmente a las súplicas del demandante. Por lo tanto, declaró responsable administrativamente y patrimonialmente a los demandados precitados, por los perjuicios causados a los demandantes. Por consiguiente, condenó a la entidad a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de daño moral:

Nombre del demandante	Relación	Perjuicios morales (SMMLV)
José Edwin García Velasco	Víctima directa	60 SMMLV
Cenen García	Padre de la víctima	60 SMMLV
Fabiola Velásco Chaca	Madre de la víctima	60 SMMLV
Luis Elmer García	Hermano de la víctima	30 SMMLV
Cenen Rolando García Velasco	Hermano de la víctima	30 SMMLV
Huber Eduardo Velasco	Hermano de la víctima	30 SMMLV

Por concepto de daño a la salud y Lucro cesante consolidado y futuro:

Nombre del demandante	Relación	Daño a la salud (SMMLV)	Lucro Cesante Consolidado y Futuro
José Edwin García Velasco	Víctima directa	60 SMMLV	\$61.052.136

Notificada la decisión del despacho de primera instancia, la parte demandada elevó recurso de apelación, por tanto, el juzgador sin celebrar la audiencia de conciliación prevista por el artículo 70 de la ley 1395 de 2010, repartido al Consejo de Estado sección tercera, subsección A) con el motivo de resolver el recurso de apelación. En vista de la irregularidad mencionada, este, mediante auto del 28 de mayo de 2015, devuelve el proceso al a-quo en virtud de la falta de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad de los recursos de apelación contra sentencias de carácter condenatorio.

Así las cosas, el a-quo al sanear el yerro procedimental observado por el Consejo de Estado, celebra la audiencia de conciliación documentada en el acta de audiencia No. 67 del 27 de octubre de 2015, en el cual, se observa que la fórmula de conciliación de la parte demandada conforme al oficio No. OFI15-00037 MDNSGDALGCC de fecha 08 de octubre de 2015 por el comité de conciliación de la entidad propone dirimir el conflicto pagando el 80% de la condena impuesta por la sentencia, fórmula conciliatoria aceptada por el apoderado de la parte actora.

Frente al acuerdo conciliatorio celebrado en la audiencia de conciliación precitada, en auto interlocutorio No. 198 del 27 de noviembre de 2015, el Despacho considera que el acuerdo conciliatorio cumple con los requisitos del artículo 70 de la ley 446 de 1998, por lo tanto, aprueba el acuerdo conciliatorio total logrado entre el apoderado judicial de la parte actora y el apoderado de la entidad demandada en audiencia de conciliación, celebrada el 27 de octubre de 2015.

Ejecutoriado el auto anteriormente manifestado, observa el Despacho que existió una cesión de crédito entre Luis Eduardo Camacho Moreno (apoderado

de la parte actora, quien para efectos del contrato obró en calidad de cedente) y la señora Sandra Patricia Lara Ospina, en su calidad de apoderada de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad que a su vez obra única y exclusivamente como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, actuando como cesionaria, respecto del 35% de los derechos económicos reconocidos por la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 29 de octubre, la cual tuvo acuerdo conciliatorio en audiencia de conciliación, aprobado por el auto No. 198 del 27 de octubre de 2015 quedando ejecutoriada el 9 de diciembre de 2015.

Finalmente, esgrimido lo anterior, la obligación que se pretende recaudar se sustenta en:

- El 35% de los derechos económicos reconocidos por el Auto interlocutorio No. 198 por medio del cual, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio suscitado entre las partes, lo cual se compone de la siguiente forma:

Nombre del demandante	Perjuicios morales (SMMLV)	Daño a la salud (SMMLV)	Lucro Cesante Consolidado y Futuro
José Edwin García Velasco	48 SMMLV	48 SMMLV	\$48.841.708,8
Cenén García	48 SMMLV	N/A	N/A
Fabiola Velasco Chaca	48 SMMLV	N/A	N/A
Luis Elmer García Velasco	24 SMMLV	N/A	N/A
Cenén Rolando García Velasco	24 SMMLV	N/A	N/A
SUBTOTAL	192 SMMLV \$123'715.200	48 SMMLV \$30'928.800	\$48'841.708,8
Total Conciliación	\$203.485.708,8		
TOTAL 35% HONORARIOS	\$71.219.998,8		

Quiere decir lo anterior que, la sumatoria de los valores de perjuicios morales; \$123.715.200, daño a la salud; \$30.928.800, lucro cesante consolidado y futuro; \$48.841.708, es de \$203.485.708, lo cual, bajo el contrato de cesión de crédito plasmado, refiere al 35% de la cifra precitada, estableciéndose la cifra a pagar de \$71.219.998.

- La suma de \$97.461.981, valor correspondiente a los intereses de mora causados desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria del Auto Interlocutorio No. 198 por medio del cual la Sala aprueba el acuerdo conciliatorio de las partes en Audiencia de conciliación.

Ahora bien, si el precitado auto quedo ejecutoriado el 10 de diciembre de 2015, y el 27 de mayo de 2021 fue radicada la demanda ejecutiva, no se entiende porque se calcularon los intereses de mora hasta el 23 de febrero de 2021.

Por lo anterior, la parte demandante solicita que se libre mandamiento de pago por las sumas de dinero mencionadas.

II. CONSIDERACIONES

EL PROCESO EJECUTIVO - GENERALIDADES

El proceso ejecutivo tiene por objeto la satisfacción de un derecho subjetivo, de contenido patrimonial, del cual no se discute su certeza sino únicamente su cumplimiento por parte del deudor. Para la ejecución de la obligación, el derecho que la cimenta debe estar registrado en un documento que será el título ejecutivo. Con todo, al margen de la certeza de la obligación, es menester que la misma y el título que la sustenta reúnan unos requisitos formales y otros de fondo.

Sobre exigencias de fondo, el artículo 422 del Código General del Proceso expresa:

"ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184."

La normativa procesal transcrita impone que la obligación a ejecutar debe ser clara, expresa y exigible. *"...Clara es aquella obligación en la que los elementos constitutivos de la prestación debida son inteligibles o fáciles de comprender; expresa es la que se deriva explícita o evidentemente, en oposición a aquellas presuntas o supuestas, y exigible alude a que la misma tenga vocación para ser satisfecha, bien por haber nacido pura y simple, o en el evento de estar sujeta a plazo o condición, cuando la circunstancia modal que da lugar al pago ya hubiere acaecido".*¹

Con todo, dispone la jurisprudencia que frente al documento distinto al título valor, la ausencia de algún elemento de fondo sólo podrá predicarse cuando, pese a haberse realizado una interpretación exhaustiva del escrito no se alcanzó convicción respecto a su ejecutabilidad, porque de su tenor literal se derivan varias interpretaciones sobre lo debido, o su monto, o la forma de pago o los escenarios de satisfacción. En tal sentido, si se llega a determinar que la obligación que se pretende ejecutar presenta inconsistencias pero las mismas pueden ser zanjadas con una hermenéutica integral, y este proceso interpretativo resulta conforme las pretensiones de la demanda, el juzgador podrá inferir claridad y en consecuencia, proferir mandamiento de pago².

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 11 de abril de 2016, expediente No. 76001-23-33-000-2015-00226-01(56315)A. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

² Ídem.

Por otro lado, en cuanto a los requisitos de forma, se ha dicho que el título ejecutivo debe constituir una unidad jurídica, y ser *i)* auténtico y *ii)* proceder del deudor o su causante, o de una sentencia judicial que imponga una condena, o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva, y, en nuestra especialidad, los actos administrativos con constancia de ejecutoria en los que conste el reconocimiento de una obligación a cargo de la respectiva autoridad administrativa, conforme el numeral 4 del artículo 297 del CPACA.

Sobre la autenticidad documental en el proceso ejecutivo, el artículo 246 del CGP, aplicable a esta jurisdicción conforme el artículo 211 del CPACA³, dispone:

"ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, *salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.*

Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente." (Negritas de la Sala).

La normatividad transcrita instituye que en los procesos judiciales las copias tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo que por disposición legal se haga necesaria la aportación del original o una copia específica; mientras que el artículo 215 del CPACA establece que, tratándose de títulos ejecutivos, los documentos que los contengan deben cumplir con los requisitos de ley.

La lectura integral de los contenidos anteriores indica que, pese a que la normativa procesal, por regla general, ha optado por morigerar las exigencias probatorias de la prueba documental en el sentido de asignar a las copias el mismo valor que el documento original, en el proceso ejecutivo en específico aún se mantiene la exigencia de aportación del documento original o copia auténtica para la conformación del título de ejecución. En efecto, cuando el artículo 251 transcrito establece la necesidad de aportar en este proceso especial los documentos que reúnan los requisitos de ley, está haciendo referencia, ni más ni menos, al allegamiento de documentos originales o en copia auténtica.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha dispuesto lo siguiente⁴:

³ARTÍCULO 211. RÉGIMEN PROBATORIO. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de febrero de 2016, expediente No. 76001-23-25-000-2000-01595-01(33715). C.P. Martha Nubia Velásquez Rico

"La Sala advierte que algunos documentos que se allegó al expediente fueron aportados en copia simple, sin embargo a propósito del valor probatorio de este tipo de copias se impone la necesidad de traer a colación lo decidido en sentencia de unificación que profirió la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se produjo una importante modificación jurisprudencial, de conformidad con los siguientes términos:

"Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales –necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo– es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes"⁵.

Para la Sala resulta pertinente realizar una precisión en cuanto al alcance de la sentencia de unificación jurisprudencial cuyos apartes se vienen de transcribir, puesto que si bien se estableció en ella que en tratándose de procesos ejecutivos el título de recaudo que soporte la obligación debe obrar en original o en copia auténtica en los eventos autorizados por la ley, no es menos cierto que dicha restricción al ámbito de aplicación de la jurisprudencia transcrita solo opera para aquellos procesos que se tramiten de esa forma, esto es para los denominados procesos ejecutivos, excluyéndose por tanto de tal carga a los procesos ordinarios como el de reparación directa que ahora se decide en segunda instancia, puesto que lo que se pretende en este último no es otra cosa que acreditar la configuración de la responsabilidad de la entidad pública demandada, de allí que aunque la prueba documental respectiva corresponda a un título ejecutivo o, incluso, a un título valor, sí podrá apreciarse y valorarse en cuanto hubiere sido aportada o recaudada en copia simple."

Es de tal manera como debe leerse el inciso 4 del artículo 244 del CGP, cuando dispone que *"...se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo"*; entendiendo que la presunción de autenticidad sólo se aplicará cuando los documentos constitutivos de título aportados al proceso aglutinen los requisitos formales y materiales que deben ostentar.

Finalmente, en cuanto al trámite, no cabe dudas que el proceso de ejecución en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se guía por la disposiciones del hoy Código General del Proceso en tanto el CPACA no dispone un trámite específico para tal menester. Ante tal vacío, se hace necesario acudir en primera instancia a la cláusula

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

general de remisión 306 del CPACA, y frente a la ejecución de títulos ejecutivos derivados de contratos estatales en específico, atender el artículo 299 ídem:

*"ARTÍCULO 299. DE LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE CONTRATOS Y DE CONDENAS A ENTIDADES PÚBLICAS. Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, **en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.***

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento"

(...)

"ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo" (Negritas de la Sala).

DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA⁶ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del

⁶ Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁷ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *"presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal"*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:⁸

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁹:

" El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender" y expreso lo que es "claro, patente,

⁷ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁸ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁹ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

especificado”,¹⁰ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.¹¹

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha entendido que, en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”¹²; puesto que solo se requiere copia de la sentencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible. Al respecto, en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016,¹³ se indicó lo siguiente:

" (...)

Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia. Es cierto que la norma citada indica que los actos administrativos expedidos por las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o expedidos en

¹⁰ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

¹¹ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

¹² Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia 14 de marzo de 2019 Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02057-01(0044-16).

¹³ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez Bogotá, D.C. Sentencia del 18 de febrero de 2016 bajo el número de radicado: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor Maria Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Posición reiterada en la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2017, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC) « Esta Corporación a través de la Sección Tercera ha señalado que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, **no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo.** [...] De la norma anterior [artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos... (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.

cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por "exceso ritual manifiesto". Con relación a ello, se indicó:

" Repárese que las resoluciones núm. PAP 039428 del 21 de febrero de 2011 y núm. UGM 010620 de 2011 fueron expedidas por la entidad con el único propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias citadas, luego, no son actos administrativos que las complementaron o adicionaron y en modo alguno cambiaron lo que en ellas se encuentra ordenado. En consecuencia, no forman parte del título ejecutivo como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, a la entidad demandada correspondía demostrar que ya había cumplido la obligación impuesta en las sentencias, para lo cual debía allegar las pruebas que lo demostraran, que en este caso, no son otras que los actos administrativos expedidas en cumplimiento de la sentencia, conforme lo consagrado en el artículo 509 del C.P.C.. Al ordenarse a la parte demandante que allegara copia auténtica de los actos administrativos que dieron cumplimiento parcial a la condena impuesta en la sentencia, es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cual fundamenta la intervención en sede de tutela.

Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad.¹⁴ (Negritas fuera del texto)

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las sentencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:

" Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
(...)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.... (negrillas por fuera de texto)

Como se puede colegir, las sentencias que se pretenden valer como título ejecutivo, conforme al precitado dispositivo normativo se deben aportar con su respectiva constancia de ejecutoria. Así mismo, el Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que " *el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no exige que el mencionado documento deba estar en original. En*

¹⁴ *Ibídem*

efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo "las sentencias debidamente ejecutoriadas (...) ", además, "el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que "(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)". Así mismo, dispone que (...) "se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo".¹⁵

De acuerdo con los apartes normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, en relación a los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento total o parcial de una sentencia judicial, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1. Prestarán mérito ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se haya condenado a la administración al pago de una suma de dinero.
2. El título ejecutivo en mención debe contener una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
3. Las sentencias, junto con su constancia de ejecutoria, pueden ser aportadas al proceso en copia simple, toda vez que se presumen auténticas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso.
4. No es indispensable aportar la copia o el original del acto administrativo que da cumplimiento a la decisión judicial, toda vez que este no hace parte del título ejecutivo que solo está constituido por las sentencias judiciales que contienen la obligación. De exigirse, el juez incurrirá en un exceso ritual manifiesto.
5. Si bien el acto administrativo que acata la decisión judicial no hace parte del título ejecutivo, este sirve de contraste para determinar si la sentencia fue acatada a cabalidad por parte de la administración.

3.2. CASO CONCRETO:

Como se puede colegir del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. La demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. El término para la presentación de la demanda no ha vencido;
3. La demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;
4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. Si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

¹⁵ Aparte tomado del fallo de tutela del 3 de agosto de 2017, bajo el proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC)

- **DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:**

En el presente asunto, el artículo 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la ejecución de condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, consagra lo siguiente:

"ARTÍCULO 299.

...

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento".

Según la regla de competencia por razón del territorio consagrada en el numeral 9° del artículo 156 del C.P.A.C.A menciona que: *"En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva".*

En vista de lo anterior, es claro entonces que en vigencia del C.P.A.C.A, será competente para la ejecución de las condenas impuestas por esta jurisdicción a una entidad pública, el mismo Juez que profirió la respectiva providencia.

Ahora bien, como quiera que en el presente caso fue repartido y conocido por el Despacho del Dr. Valero, empero, ante la creación del Despacho de Descongestión en aquel tiempo de la Dra. Luz Stella Alvarado, se remitió el proceso en el cual, el Despacho de descongestión profirió sentencia y auto aprobando conciliación durante la vigencia del CPACA. Por lo anterior, se tiene entonces que por el factor de conexidad le compete al juez de conocimiento fuera el mismo de la ejecución, siendo competente de la presente ejecución el Despacho del Dr. Valero.

Por lo anterior, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva, por ser el juez de conocimiento del proceso ordinario.

- **CADUCIDAD:**

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado de conformidad con el literal (k) de la referida disposición, se estableció un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

La Sala dilucidará el conteo de términos para establecer si la acción se encuentra caducada. Se tiene entonces que al momento de la presentación de la demanda esto es; 27 de mayo de 2021, y observada la constancia secretarial (folio 185) en el cual, pone de manifiesto que el Auto No.198 del

27 de noviembre de 2015 se encuentra ejecutoriado desde el 9 de diciembre del 2015, bien podría concluirse que, preliminarmente la acción ejecutiva se encuentra caducada, no obstante, dicha conclusión es errónea por lo siguiente:

Para el caso concreto, el término de caducidad se encuentra establecido en el artículo 164 en su literal k). del CPACA, que dispone lo siguiente: "*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la*

Para el caso concreto, el término de caducidad se encuentra establecido en el artículo 164 en su literal k). del CPACA, que dispone lo siguiente: "*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término exigibilidad de la obligación en ellos contenida*", no obstante, la disposición del artículo precitado no debe tenerse como absoluta, puesto que para interponer demandas ejecutivas conlleva un término adicional consagrado en el artículo 192 Inciso 2 en el cual establece que: "Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada."

Por lo anterior, es menester dilucidar la fecha de iniciación del término de conteo de caducidad, así pues, se tiene entonces que la fecha del Auto No. 198 (por medio del cual se aprueba el acuerdo conciliatorio) del 27 de noviembre de 2015, ejecutoriado el 9 de diciembre de 2015, se le sumará los 10 meses que tenía plazo la entidad para pagar la conciliación aprobada, resultando entonces que el conteo debe empezarse el 10 de octubre de 2016.

De manera que, siendo la fecha para iniciar el conteo el 10 de octubre de 2016, la parte actora ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sociedad que en el presente proceso actúa única y exclusivamente como (Administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA C*C), tenía para presentar la demanda hasta el 10 de octubre de 2021, por lo que, en vista del acta de reparto del proceso ejecutivo da cuenta que la demanda ejecutiva fue interpuesta el 27 de mayo de 2021, concluye la Sala que la **acción ejecutiva se encuentra vigente**.

- **LA DEMANDA FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

La demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones el poder, la sentencia o conciliación como título de ejecución, la constancia de ejecutoria de la precitada providencia, la solicitud de pago, la respuesta dada por la entidad ejecutada, y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante.

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA PARTE EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, debe mencionar la Sala que la obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en la sentencia judicial se condenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEREA a pagar unas sumas de dinero a favor de los ejecutantes, posteriormente en audiencia de conciliación se logró acuerdo conciliatorio al pago del 80% de la condena impuesta en sentencia en Auto de 198 del 27 de noviembre y se dispuso dar cumplimiento a la providencia dentro de los términos indicados en los artículos 192 del CPACA.

Es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición toda vez que la conciliación, el apoderado judicial de la parte demandante; Luis Eduardo Camacho Moreno, solicitó el pago de la misma el 8 de febrero de 2016, cumpliendo entonces el plazo fijado en el artículo 192 inc.5, esto es, durante los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que aprobó conciliación, tuvo que acudir a la entidad responsable para la causación de los intereses hasta cuando se presenta la demanda.

Ahora bien, como en el *sublite* se observa una cesión de crédito, es menester por esta Sala establecer el elemento de la claridad del título ejecutivo que se entrelaza con la titularidad de la cesión del crédito, es decir, para impetrar la acción ejecutiva es imperante saber quien ostenta la calidad de acreedor en la obligación perseguida, por lo tanto, deberá la Sala discernir acerca de los presupuestos para la validez de la cesión de créditos, y la aplicabilidad de dichos presupuestos al caso concreto.

Para entrar en materia, se tiene entonces que la cesión de crédito es: *"(...) un acto jurídico por el cual un acreedor, que toma el nombre de cedente, transfiere voluntariamente el crédito o derecho personal que tiene contra su deudor a un tercero, que acepta y que toma el nombre de cesionario."*¹⁶

Los requisitos legales para la aplicabilidad de esta figura están consagrados en el artículo 1951 del C.C. y s.s., de manera que la hermenéutica de la norma precitada la determinó el consejo de estado de la siguiente manera:

Frente al artículo 1951 del C.C: *"La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento-.*

Conforme a la norma citada, si el crédito cedido consta en un documento, la tradición consiste en la entrega del título, en el que conste la firma del

¹⁶ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC-021 de 05 de mayo de 1941

cedente y su manifestación de haberlo cedido al cesionario. Pero si no consta en documento, el acreedor lo confeccionará haciendo constar en él la existencia del crédito, individualizándolo y manifestando que lo cede al cesionario. Este documento en todo caso no constituye prueba de la existencia del crédito para el deudor, simplemente demuestra que la cesión tuvo ocurrencia y que entre el cedente y el cesionario se celebró el contrato respectivo.

Para que la cesión surta efectos contra el deudor y contra terceros, debe notificársele a dicho deudor o ser aceptada por éste (art. 1960 ib.) y la notificación se hace "con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente." (art. 1961 ib.). Es decir, que para que opere la cesión de un crédito, se requiere entregar el documento en donde conste la existencia de la obligación.

Por ello, la validez de la cesión está condicionada a la existencia previa de los créditos cedidos en cabeza del cedente, o sea, que para que un saldo crédito se aplique a una tercera persona diferente de su titular originario, necesariamente debe existir para el cedente, con anterioridad a la cesión.¹⁷

De ahí que deba arribarse a la conclusión que, los requisitos de validez para que produzca efectos jurídicos la cesión del crédito son:

- Tiene que existir titularidad de los créditos, es decir, en cabeza del cedente debe reposar el derecho crediticio para poder transferir el derecho económico.
- "si el crédito cedido consta en un documento, la tradición consiste en la entrega del título, en el que conste la firma del cedente y su manifestación de haberlo cedido al cesionario"
- Para que la cesión surta efectos, se deberá notificar al deudor, o que este mismo acepte la cesión del crédito, y se le deberá entregar el documento en donde conste la existencia de la obligación.

Revisado los presupuestos, la Sala observa lo siguiente:

- En el expediente (fls 43-53), se tiene entonces que, según la cláusula primera del contrato de cesión de crédito celebrado por el ejecutante (Alianza fiduciaria) y el señor "Luis Eduardo Camacho", manifiesta que los derechos económicos adquiridos en virtud del reconocimiento de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por los beneficiarios para llevar a cabo la representación del proceso con radicado 2011-00023-00, y el auto interlocutorio No. 198 de fecha 27 de octubre de 2015 (aprobando acuerdo conciliatorio), proferido por la misma corporación, el presunto cedente; "Luis Eduardo Camacho" cuenta con el 35% de los derechos económico del acuerdo conciliatorio en donde se condenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEREA a pagar unas sumas de dinero a favor de los beneficiarios, como se puede observar en el contrato:

¹⁷Consejo De Estado, Sección Cuarta, Fecha: veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006), Rad: (15307), CP: María Inés Ortiz Barbosa.

CLÁUSULA PRIMERA.- Por virtud del presente contrato, el CEDENTE cede a favor del CESIONARIO el 35% de los Derechos Económicos reconocidos a los señores José Edwin García Velasco mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.219.088 de Inza, Cenen García mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 12.270.853 de La Plata, Fabiola Velasco Chala mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 25.456.047 de Inza, Luis Elmer García Velasco mayor de edad, identificado con

Página 1 de 7

Administrativo del Valle del Cauca – Despacho de Descongestión, debidamente ejecutoriada desde el día 09 de diciembre de 2015 (en adelante la Conciliación), dentro del proceso adelantado por José Edwin García Velasco y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana (en adelante la Entidad Condenada), identificado con radicación número 76-001-23-31-000-2011-00023-00.

Los Derechos Económicos objeto de esta cesión fueron adquiridos por EL CEDENTE, en virtud del reconocimiento de los honorarios pactados en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito con Los Beneficiarios, para llevar a cabo la representación judicial al interior del proceso del cual deriva la Sentencia.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Conforme a la Conciliación, el 35% de los Derechos Económicos derivados de la misma por concepto de perjuicios morales, Daño a la Salud y materiales en modalidad de Lucro Cesante Consolidado y Futuro que son objeto de la presente cesión por cada CEDENTE, corresponden a los siguientes valores:

- Por lo anterior, al no poder establecer la titularidad de los créditos invocados del cedente "Luis Eduardo Camacho", resulta inocuo el contrato de cesión de crédito, puesto que uno de los requisitos para la validez del mismo es que en cabeza del cedente debe reposar el derecho crediticio para poder transferir el derecho económico, lo cual, en el *subexamine* no se evidencia dicha habilitación, pues nunca se adjuntó el contrato de prestación de servicios para comprobar el reconocimiento de honorarios que los beneficiarios otorgaron el 35% de los derechos económicos del título ejecutivo complejo al señor "Luis Eduardo Camacho". Por lo tanto, aunque el crédito existe, no reposa en la cabeza del "cedente" del contrato de cesión de crédito celebrado con ALIANZA FIDUCIARIA, sino que permanece la titularidad del crédito a los beneficiarios, de manera que no produce efectos jurídicos el contrato antedicho.

En efecto, al no observarse la titularidad del crédito como requisito de validez para la cesión de crédito, el ejecutante no está revestido para interponer la acción ejecutiva a un derecho económico que, por lo obrante en el expediente, no posee tanto "Luis Eduardo Camacho" con la calidad de cedente en el contrato, y ALIANZA FIDUCIARIA como cesionaria en el contrato de cesión de crédito.

Conforme lo anterior, la titularidad del derecho de crédito entrelaza uno de los elementos del título ejecutivo, por cuanto se parte del inequívoco contenido jurídico de fondo; no obstante, al ser un título ejecutivo complejo, abarca varios elementos del título ejecutivo como: i) objeto, ii) sujeto activo y pasivo, iii) la causa, entre otros; luego la claridad ha de comprenderse todos sus

elementos constitutivos, por lo que en el *subexamine* existe duda con respecto a los sujetos acreedores de la obligación, aunque la efectividad de la obligación debe surtirla la NACIÓN – MIN DEFENSA – FUERZA AEREA a favor de los demandantes por unas sumas y equivalencias determinadas, dicha atribución no se plasma en la parte activa (acreedor) quien pretende en acción ejecutiva el pago de la obligación. Bajo esa tesitura, al adolecer de efectos jurídicos la transferencia del crédito, por cuanto no se logra dilucidar quien ostenta la calidad de acreedores en el caso concreto, se negará el mandamiento ejecutivo.

Finalmente, al verificar la ausencia de uno de los elementos esenciales del título ejecutivo; esto es, que el título sea CLARO frente a la calidad de los sujetos quienes pretenden hacer valer ejecutivamente una obligación, adolece de efectos jurídicos la acción ejecutiva impetrada, pues el accionante no logra establecer la calidad de acreedor en la obligación perseguida.

R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la **NACIÓN-MIN DEFENSA – FUERZA AEREA**, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia archívese el proceso previo a las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Magistrada